

Perú: la política entre el discurso y la ráfaga

Carlos Urrutia-B. Periodista peruano. Ha sido director de la revista "Marka".

La combinación de libertad de prensa con la aplicación dictatorial de una política económica neoliberal, produjo una nueva escena política en que la violencia tomó el papel principal. El resultado ha sido que, también, la democracia se ha devaluado en el Perú.

La profundización de la crisis social y económica, desde que el actual gobierno asumió sus funciones, ha puesto en evidencia un nuevo fracaso político del neoliberalismo económico en América Latina. Las explicaciones oficiales han responsabilizado por esto a la dictadura militar, primero, luego a la crisis internacional y, ahora, a los desastres naturales. Consecuencia lógica de tan arbitrario tejido justificatorio ha sido la pérdida de credibilidad del régimen accionpopulista, llegado al poder con una considerable mayoría de los votos en mayo de 1980.

Esta espiral hacia abajo arrastró a la democracia en sus dos realidades: como régimen político, se ha debilitado hasta el extremo de conceder un significativo espacio de poder, mayor del que tenían hace tres años, a las fuerzas antidemocráticas, comprendidos civiles y militares, de izquierda y de derecha. Asimismo, la democracia como noción de conciencia o ideología popular ha sufrido una mayor y más honda desvirtuación.

Democracia en la prensa, dictadura en la economía

La libertad de prensa instalada en 1980 tuvo tres ejes: primero, la devolución de los grandes medios masivos de comunicación a sus antiguos propietarios; segundo, la implantación de la libertad de empresa y, tercero, la ausencia de fiscalización estatal respecto de los contenidos de la comunicación de masas. Esto ha permitido la presencia de una docena de diarios, entre los cuales hay tres que se ubican en la oposición al gobierno.

Es justo reconocer que el actual régimen ha permitido la subsistencia de un esquema plural en la radio, la prensa y, menos, en la televisión.

Paralelamente, el modelo económico guiado por el mito financiero monetarista se impuso al país sin consultar a nadie, sin tomar en cuenta las demandas populares

ni escuchar las voces discordantes: las decisiones fueron verticales. Pero no se reduce a eso la dictadura económica; el esquema fue montado para que el gran capital transnacional impusiera, en forma vertical, sus condiciones por encima de los intereses nacionales y para que una reducida minoría se beneficiara en detrimento de las grandes mayorías desfavorecidas. Poco importó la quiebra masiva de la mediana y pequeña empresa, los despidos también masivos, el crecimiento del sector informal - subempleo - donde impera la ley de la jungla, del déficit fiscal y de la recesión productiva.

Ni la nación ni el pueblo tuvieron la primera prioridad, de ahí que las consecuencias sociales sean catastróficas: la brusca caída de la capacidad adquisitiva de los salarios de las ya empobrecidas mayorías nacionales, la desactivación de la industria que produce para el mercado interno, la devaluación que este año superará el 100%, al igual que la tasa de inflación, el encarecimiento del crédito a niveles inmanejables para quienes más lo necesitan, la deuda externa que ya pasa los trece mil millones de dólares (cada peruano debe más de 700 dólares per cápita) y equivale al 72% del PBI, son algunos de los logros que puede exhibir esta política económica, que ha recibido rotundos rechazos de los más diversos sectores sociales y políticos del país.

Los intentos de implementar una política social paliativa a través de la concertación social fueron, hace poco, desmontados. La renuncia del ministro de Trabajo, Alfonso Grados, significó la derrota del último romántico socialdemócrata sumergido en un gabinete neoliberal.

Las fuerzas políticas formales

Para fines de síntesis, dividiremos las fuerzas políticas principales en dos gruesos sectores, guiándonos por lo más aparente: uno abierto y otro cerrado; entendiendo que en la actual coyuntura, tanto la derecha como la izquierda actúan a través de ambos y que la diferencia obedece a concepciones de estrategia política.

Dentro del sector abierto, lo más significativo son las cuatro organizaciones que dividen, de manera bastante clásica, el panorama político nacional: el Partido Popular Cristiano (PPC) encarna una derecha tradicional de tipo conservador que sólo significa un 10% del electorado, aunque se ha dado maña para participar, como colaborador del gobierno, de las grandes decisiones políticas oficiales; Acción Popular (AP) es el partido de la derecha liberal transnacionalizada, que encabeza el actual gobierno; el APRA viene a representar una socialdemocracia acriollada en busca de renovación generacional y, la Izquierda Unida (IU) es el frente de las organizaciones más importantes de la izquierda abierta, con predominio marxista.

Los sectores empresariales han mostrado sus adhesiones y simpatías por los tres primeros, aunque los sectores ligados a transnacionales y el gran capital están

más cerca de AP; los grupos capitalistas nacionales, relacionados a la producción y el mercado internos, se distribuyen principalmente entre la derecha conservadora del PPC, los más poderosos, y el APRA. Es interesante observar que los sectores empresariales ligados al proceso reformista, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, han aparecido ahora con cercanías visibles al APRA y que en su recorrido pasaron por una fase acciónpopulista, mostrando una precaria perspectiva política de clase en la medida en que el proteccionismo de los setenta entró en contradicción con su aspiración a la democracia formal. Esto llevó a muchos a votar por Belaúnde en 1980 y ahora, en plena democracia formal están oprimidos por un modelo de corte transnacional en el que resultan perjudicados, lo que los ha devuelto a su nostalgia por un Estado Protector como el que promete el APRA. El persistente prejuicio anticomunista de estos grupos empresariales ha hecho inviable alcanzar niveles de acuerdo con la izquierda marxista que en algunas oportunidades ha intentado iniciar un diálogo.

La Izquierda Unida, a diferencia de los anteriores, es un frente y esto es el resultado de un dramático aprendizaje cuya enseñanza hoy nadie pone en duda: el frente unitario de izquierda tiene mayor capacidad de convocatoria que la suma de los partidos que la integran y dirigen.

El movimiento sindical y popular no ha cedido en su lucha por evitar que la catástrofe económica siga empobreciendo a los trabajadores. Mineros y pescadores han realizado marchas, paros y huelgas exigiendo la estabilidad laboral amenazada con la crisis y rechazando la política reprivatizadora del gobierno. En el sector manufacturero, los textiles ha manifestado de diversas maneras su rechazo a la política del gobierno, al igual que otras ramas de la producción industrial. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha llevado a cabo un exitoso y unitario paro nacional el 10 de marzo pasado, demandando cambios radicales en la política económica, tendientes a proteger los intereses populares.

Los trabajadores del agro han realizado, hace algunas semanas, el significativo Congreso Unitario Nacional Agrario, que reunió por primera vez a los dirigentes de diversas organizaciones de campesinos, de pequeños propietarios y de la otra poderosa sociedad de grandes propietarios de tierras y ganado: el resultado del evento fue un acuerdo de todos en el cuestionamiento de la política agraria del gobierno. También la baja oficialidad de policía hizo huelga en el mes de junio, que demostró la debilidad institucional en que habían caído las fuerzas del orden.

El movimiento popular en los últimos tiempos ha dirigido sus baterías contra esta democracia implementada por AP, lo cual es grave por cuanto constituye la base sustancial para cualquier proyecto realmente democrático en el Perú.

Los extremismos

El sector cerrado de la política peruana presenta también una corriente derechista y otra izquierdista, ambas extremas. En la derecha encontramos sectores fascistas, civiles y paramilitares y también sectores de las FF.AA., aunque no a la institución como tal. Estos han tenido una vida clandestina y han hecho cultura de la sobrevivencia bajo tierra evitando conscientemente su aparición como grupos organizados o instituciones concretas; existen algunos volantes y eventuales periódicos de agrio lenguaje anticomunista y agresivo cuestionamiento a la democracia, que muestran su existencia. No poseemos pruebas de su intervención directa en la violencia social que impera, aunque los indicios son sumamente elocuentes.

Del otro lado, el panorama lo domina el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso (SL), organización que irrumpió con la lucha armada en 1980 y que fue gestando un proceso de acumulación de fuerzas en los sectores campesinos más pobres y un desarrollo militar entre terrorista y guerrillero, desde rural hasta acciones urbanas. Junto a SL existe una izquierda político-militar, cuya intervención es insignificante, hasta la fecha.

SL se ha convertido en un factor principal del escenario político nacional en sólo tres años. Pocos tienen claridad sobre los fines y objetivos que persigue, de ahí sus múltiples tipificaciones: terroristas, maoístas, polpotianos, revolucionarios, etc. Lo cierto es que en 1980 no pasaban de ser un grupo de aventureros petardistas y hoy han llegado a constituirse en la ley en un área rural atrasada en siglos con relación a nuestras ciudades subdesarrolladas. Ley que habla de una justicia social de contornos mágicos, con prescindencia de la clase obrera como eje central del proceso revolucionario y hasta de la propaganda educativa de la población. Más allá del peculiar medioevo ayacuchano, la gente queda entre asombrada y temerosa ante la masacre de 14 comuneros, campesinos pobres de Lucanamarca, o de diversas autoridades humildes de esa región, o de gentes del pueblo asesinadas como supuestos informantes de la policía, o de niños que por casualidad estaban en el lugar del asalto, o como el 11 de julio pasado, de simples militantes de AP que se encontraban en su local partidario.

Las FF.AA. y la lucha armada

A esta presencia provocadora de una violencia que se pone al margen de la ley como estrategia política, el gobierno ha respondido haciendo gala de la peor comprensión del fenómeno: la violencia represiva. Las fuerzas del ministerio del Interior, más que las FF.AA., no sólo han fracasado en su objetivo de liquidar el terrorismo y la guerrilla, sino que han mostrado al país su insolvencia moral para combatirlos, constituyéndose en la práctica, en uno de los factores de acumulación de fuerzas en favor de SL. El abuso de autoridad, su proclividad por la prepotencia y la corruptela, han sido denunciados en innumerables casos, y la sanción oficial lo único que no ha tenido es dimensión ejemplificadora.

Dos fenómenos políticos han crecido sustancial y cualitativamente a lo largo de estos tres años de régimen "democrático": las FF.AA. y la lucha armada. Las primeras tienen un nuevo prestigio en reemplazo del desprestigio con que salieron del gobierno en 1980, una presencia significativa en el presupuesto nacional de casi la cuarta parte, sin contar operaciones de crédito externo, gozan de salarios muy por encima de la media de la Población Económicamente Activa calificada y casi gobiernan con el poder constituido, detentando el poder político en las zonas en que impera la lucha armada. AL, por su parte, ha logrado despertar simpatías, más por negación, por desesperación o por falta de alternativas democráticas viables, que por afirmación de fines y métodos.

Han perdido la izquierda abierta, cuestionada frontalmente por SL; AP se ha puesto pendular entre la democracia débil y la tentación del duro orden civil-militar; las organizaciones sindicales que, al menos, no han ganado el espacio que debieron, el pueblo en su conjunto que aspiró a una democracia no tan cara; en fin, ha perdido la democracia, que tres años después de esta experiencia, ha sido vaciada de contenido, ha perdido su significación doctrinaria y, lo que es más grave, con poco valor positivo como para alojarse entre las aspiraciones populares, la democracia se ha reducido a una denominación particular con la que el oficialismo apellida al actual gobierno.

El espectro político peruano está entrando a una nueva fase electoral, esta vez elegirán a todas las autoridades municipales del país, el 13 de noviembre próximo, y las fuerzas se han alineado como hemos descrito, en lo fundamental. Se espera un reordenamiento de la escena política que salió del proceso de 1980, en el que AP y su gobierno deben ser derrotados en las urnas. Esta vez se presenta una buena oportunidad a IU y al APRA para mostrar al país que democráticamente se puede dar una batalla legítima en nombre de los intereses del pueblo.